



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

**D. JAIME ALMENAR BELENGUER**, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

### CERTIFICA

Que en la Sesión del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 13 de octubre de 2005, se ha adoptado el siguiente

### ACUERDO

Por el cual, en relación con el expediente RO 2004/441, se aprueba la siguiente

### **RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR RO 2004/441 INCOADO A LA ENTIDAD SAIMA SISTEMAS, S.L. POR ACUERDO DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE 30 DE DICIEMBRE DE 2004.**

Finalizada la instrucción del presente expediente sancionador incoado a la entidad SAIMA SISTEMAS, S.L. por Acuerdo del Consejo de esta Comisión de 30 de diciembre de 2004 y, vista la propuesta de resolución elevada a este Consejo por el instructor del citado procedimiento sancionador y las alegaciones presentadas por la entidad inculpada, el Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha adoptado, en su sesión núm. 36/05 del día de la fecha, la siguiente Resolución:

### I

### ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.** Con fecha 13 de febrero de 2004, tuvo entrada en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, a través de correo electrónico, escrito remitido por D. Carlos Antolínez Villaverde, Director Gerente de la empresa WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.L. (en adelante, IBERCOM) por el que ponía en conocimiento de esta Comisión que la entidad ONENET S.L. (en adelante, ONENET) estaba intentando desprestigiarle.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Según ponía de manifiesto IBERCOM en su escrito (Documento 1), ONENET estaría remitiendo correos electrónicos a clientes de SAIMA SISTEMAS, S.L.<sup>1</sup> (en adelante, SAIMA SISTEMAS) que antes lo habían sido de ONENET, con la intención de desprestigiar a IBERCOM.

Para documentar tal afirmación, se adjuntaba un correo electrónico en el que ONENET realiza una serie de manifestaciones en contra de IBERCOM y SAIMA SISTEMAS, destacando, entre otras, la falta de *“licencia para operar en telecomunicaciones emitida por parte de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones”*

**SEGUNDO.** Si bien el objeto del tal comunicado no era denunciar posibles incumplimientos de los requisitos exigidos en la Ley General de Telecomunicaciones para prestar servicios de comunicaciones electrónicas, sino el denunciar posibles prácticas anticompetitivas, dado que en ese momento se estaba tramitando en esta Comisión un expediente por conflicto surgido entre IBERCOM y ONENET, se consideró conveniente consultar los diferentes Registros de Operadores cuya gestión está encomendada a esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para comprobar la situación registral de las empresas citadas.

- WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.L. figuraba inscrita, en el Registro Especial de Titulares de Autorizaciones Generales, como persona autorizada para la prestación del servicio de transmisión de datos por Resolución del Consejo, de 17 de diciembre de 1998, y para la explotación de una red de comunicaciones electrónicas, prestación del servicio fijo telefónico disponible al público por Resolución del Secretario del Consejo, de 29 de marzo de 2004.
- SAIMA SISTEMAS, S.L., en el momento de efectuar esta comprobación, no figuraba inscrita en ninguno de los Registros de Operadores como persona autorizada para explotar redes o prestar servicios de comunicaciones electrónicas.
- Consultada la página Web del Registro Mercantil Central, la sociedad SAIMA SISTEMAS es una sociedad limitada, radicada en la ciudad de San Quirze del Vallés (provincia de Barcelona), cuyo objeto social es *“el desarrollo de programas y aplicaciones informáticas, así como la fabricación, diseño, comercio al por mayor y menor, importación, exportación, distribución y representaciones de hardware, servicios de internet, etc..”*

---

<sup>1</sup> Según manifiesta IBERCOM, *“SAIMA SISTEMAS es una empresa de informática que revende los servicios de WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.L. y actúa como distribuidor nuestro entre otros en Barcelona”*.-



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

**TERCERO.** Comprobado que SAIMA SISTEMAS no figuraba inscrita como persona autorizada para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, esta Comisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 69.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJPAC), con fecha 10 de marzo de 2004, acordó la apertura de un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso y decidir sobre la conveniencia o no de iniciar el correspondiente procedimiento administrativo.

La apertura del período de información previa fue debidamente notificada a SAIMA SISTEMAS en fecha 18 de marzo de 2004, según consta debidamente acreditado. (Documento 2)

**CUARTO.** Mediante escrito presentado el día 19 de abril de 2004, D. Gerard Mancebo Pérez, en nombre y representación de la sociedad SAIMA SISTEMAS, con C.I.F. B-63/118855, y con domicilio a efectos de notificaciones en Sabadell (Barcelona), calle Les Valls nro. 31, 3º 1, notificó su intención de iniciar determinadas actividades de comunicaciones electrónicas, al amparo de la autorización general establecida en el artículo 6.1 de la Ley General de Telecomunicaciones, sin realizar ninguna referencia explícita al escrito indicado en el Expositivo anterior.

Mediante Resolución del Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 4 de mayo de 2004<sup>2</sup>, se inscribió a la citada entidad en el Registro Especial de Titulares de Autorizaciones Generales como persona autorizada para ejercer las actividades que a continuación se relacionan:

- Explotación de una red pública de comunicaciones electrónicas basada en la utilización del dominio público radioeléctrico a través frecuencias de uso común (RLAN-WIFI).
- Servicios de transmisión de datos disponibles al público: Proveedor de acceso a Internet, Interconexión de redes de área local, Mensajería electrónica, fax bajo demanda, Intercambio electrónico de datos (EDI), Suministro de conmutación de datos por paquetes o circuitos, Reventa de capacidad de transmisión/circuitos, Transmisión de información texto, imagen y sonido a través de redes públicas y Comunicaciones vocales de ordenador a ordenador.
- Servicio telefónico sobre redes de datos en interoperatividad con el servicio telefónico fijo.

---

<sup>2</sup> Expediente RO 2004/743



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

- Videoconferencia.

**QUINTO.** Con fecha 18 de junio de 2004, tuvo entrada en el Registro de esta Comisión escrito de D. Gerard Mancebo Pérez, en calidad de Administrador de SAIMA SISTEMAS (Documento 3), mediante el cual vino a efectuar las alegaciones siguientes:

*“...les informamos que Saima Sistemas ha utilizado clientes de su cartera (la cual se le presta otros servicios no relacionados al acceso a Internet) para realizar pruebas y poner en práctica los conocimientos adquiridos en este último año. Estos servicios han sido de mutuo acuerdo y lo que se pretendía es ver el resultado del día a día. Sin duda el resultado de pruebas ha sido un éxito, lo que nos ha motivado dar el paso a la notificación para poder prestar servicios de Internet (sobre todo en redes Wi-Fi) a clientes potenciales que están a la espera de poder recibir nuestros servicios”.*

**SEXTO.** Del resultado de las actuaciones llevadas a cabo en el período de información previa se llegó a la conclusión de que había elementos de juicio suficientes para estimar que concurrían las circunstancias que justificaban la iniciación de un procedimiento sancionador contra el SAIMA SISTEMAS, por haber, presuntamente, iniciado la explotación de una red y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, sin cumplir los requisitos establecidos en la Ley 32/2003, exigibles para realizar tales actividades.

**SÉPTIMO.** Una vez determinada con carácter preliminar la concurrencia de circunstancias que justificaban el inicio del correspondiente procedimiento sancionador, se redactó la propuesta de acuerdo de apertura (Documento 4).

Trasladada dicha propuesta al órgano competente para acordar el citado inicio de procedimiento, en fecha 30 de diciembre de 2004 el Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones aprobó una Resolución (Documento 5) por la que se acordaba la apertura de un procedimiento sancionador contra SAIMA SISTEMAS, como presunta responsable directa de una infracción administrativa calificada como muy grave, tipificada en el artículo 53 t) de la Ley 32/2003, consistente en la presunta explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas sin cumplir los requisitos exigibles para realizar tales actividades, establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo.

El acuerdo de iniciación fue notificado a SAIMA SISTEMAS el día 17 de enero de 2005, según consta debidamente acreditado (Documento 6).

Asimismo, el citado acuerdo de iniciación fue comunicado al instructor (Documento 7) en fecha 12 de enero de 2005, con traslado de las actuaciones existentes al respecto.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

**OCTAVO.** En fecha 17 de febrero de 2005 se recibió en el Registro de esta Comisión escrito de alegaciones de SAIMA SISTEMAS (Documento 8), respecto del acuerdo de inicio previamente notificado.

En el citado escrito, SAIMA SISTEMAS vino a alegar lo siguiente:

- Que el procedimiento sancionador se habría iniciado a partir de un “comunicado” de IBERCOM en donde manifiesta que una empresa, de la que esa Comisión entiende que no debe nombrar, estaba intentando desprestigiar a IBERCOM mediante la remisión de correos electrónicos remitidos a clientes que habían solicitado la baja definitiva a favor de SAIMA SISTEMAS. En consecuencia, SAIMA SISTEMAS debería tener acceso a dicha comunicación con el objeto de esclarecer esas manifestaciones y en su caso, formular las correspondientes acciones contra la empresa cuya identidad se omite.
- Que SAIMA SISTEMAS realizó pruebas y testeos con clientes de absoluta confianza con el objeto de ir implementando la tecnología RLAN-WIFI y comprobando dichos testeos.
- Que estas pruebas no constituyeron tráfico mercantil en su sentido estricto y tampoco deberían considerarse prestación de servicios.
- Que SAIMA SISTEMAS no facturó por dichos servicios a los clientes referidos.
- Que cuando SAIMA SISTEMAS realizó los diversos testeos con esos clientes de confianza y toda vez que comprobó que esa tecnología podría ser empleada para prestar servicios de comunicaciones electrónicas, fue cuando efectuó la notificación indicando la fecha de inicio de la actividad para el 1 de mayo de 2004.
- Que SAIMA SISTEMAS no utilizó una red pública de comunicaciones porque no prestó servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. Tampoco prestó el servicio de comunicaciones electrónicas porque no obtuvo remuneración alguna ni lo hizo a título gratuito ya que no prestó ningún tipo de servicio.
- Que los destinatarios de esos testeos no pueden englobarse en el concepto de “público” que se asimila al concepto de usuario o destinatario de una prestación. Máxime cuando para realizar los mencionados testeos SAIMA SISTEMAS los realizaba con su propio equipamiento y nunca con equipos de esos clientes de confianza.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

- Que SAIMA SISTEMAS entiende que la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas viene concedido con carácter inmediato por la ley y que el requisito previo de la notificación a la CMT lo es a efectos formales y en virtud de las competencias de control que tiene la Comisión.
- Que SAIMA SISTEMAS considera que la prestación del servicio objeto de controversia se inició efectivamente a partir de la recepción en la CMT del escrito de notificación, el 19 de abril de 2004, y no a partir de la inscripción, el 4 de mayo de 2004.

**NOVENO.** Al amparo de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, (en adelante, Reglamento del Procedimiento Sancionador), con fecha 14 de abril de 2005, el instructor del procedimiento requirió a SAIMA SISTEMAS (Documento 9) la remisión de la información siguiente:

- Denominación Social, dirección postal, nombre del representante y teléfono de las entidades con las que se realizaron las pruebas mencionadas por SAIMA SISTEMAS, S.L.
- Periodos de tiempo, con indicación de las fechas exactas, en las que se realizaron las mencionadas pruebas.

**DÉCIMO.** Con fecha 29 de abril de 2005, se recibió en el Registro de esta Comisión escrito de la representación de SAIMA SISTEMAS en contestación al requerimiento al que se refiere el expositivo anterior (Documento 10).

**UNDÉCIMO.** Con fecha 19 de julio de 2005, el instructor del procedimiento sancionador emitió la correspondiente propuesta de resolución en la que proponía lo siguiente (Documento 13):

"(..)

**PRIMERO.** Que se declare responsable directo a SAIMA SISTEMAS, S.L. de la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 53 t) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, por haber iniciado, antes de presentar ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la notificación fehaciente a la que se refiere el artículo 6.2 de la Ley General de Telecomunicaciones vigente, las actividades consistentes en la explotación de una red pública y en la prestación de un servicio de comunicaciones electrónicas.

**SEGUNDO.** Que se imponga a SAIMA SISTEMAS, S.L. una sanción económica por importe de DIEZ MIL (10.000) EUROS."



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Dicha propuesta de resolución fue notificada a la entidad SAIMA SISTEMAS mediante escrito del instructor de fecha 26 de julio de 2005, recibida por la citada entidad el día 27 del mismo mes y año. (Documento 14).

**DUODÉCIMO.** Con fecha 28 de julio de 2005, el instructor del procedimiento sancionador detectó la existencia de un error material en la transcripción del importe de la sanción económica incluida en la Propuesta de Resolución notificada, al figurar la cantidad de MIL (1.000) EUROS en lugar de DIEZ MIL (10.000) EUROS que era el importe considerado.

Dicha circunstancia, en atención a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la LRJPAC, se puso en conocimiento de la representación de SAIMA SISTEMAS remitiéndose, en consecuencia, la Propuesta de Resolución modificada en el sentido expuesto. (Documento 15)

**DECIMOTERCERO.** Con fecha 24 de agosto de 2005 tuvo entrada en el Registro de esta Comisión escrito de alegaciones a la propuesta de resolución mencionada anteriormente, presentado por el representante legal de SAIMA SISTEMAS (Documento 16). En el citado escrito, SAIMA SISTEMAS somete a consideración las siguientes alegaciones:

- Que si bien reconoce lo establecido en el artículo 105.2 de la LRJPAC en lo que se refiere a las subsanaciones debidas a errores materiales en las comunicaciones de la Administración a los interesados, no se indica en el segundo escrito remitido el derecho a formular alegaciones, así como el plazo que dispone para interponer las mismas, ni se adjunta la totalidad de la propuesta de resolución.
- Que el instructor del procedimiento habría omitido los resultados de sus averiguaciones respecto de las entidades con las que SAIMA SISTEMAS había realizado las pruebas mencionadas en su escrito de alegaciones de fecha 17 de febrero de 2005, considerando imprescindible que figurase en la propuesta de resolución estos resultados por ser pieza imprescindible para la valoración de los hechos.
- Que la sanción debería tener en cuenta que la actividad fue prestada únicamente durante dos días, pasados los cuales SAIMA SISTEMAS “*no dejó residuos de su presencia en los lugares donde se llevó a cabo la misma*” y que en el momento en que SAIMA SISTEMAS tuvo intención de prestar el servicio de comunicaciones electrónicas, procedió a realizar la notificación ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
- Que SAIMA SISTEMAS no creó ni explotó una red pública de comunicaciones, ni tenía intención de explotarla. Que tampoco prestó ni



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

tenía intención de prestar servicio de comunicaciones electrónicas disponible al público, ya que su objetivo no era prestarlo al público

- Que considera absolutamente inadmisibles las propuestas de sanción económica ya que no se ha aplicado correctamente el principio de proporcionalidad puesto que se propone aplicar una sanción económica de 10.000 Euros por una supuesta infracción cometida durante un periodo de dos días y, en todo caso, no se ha tenido en cuenta el beneficio de 3.996 Euros obtenido en 8 meses y 12 días.
- Que SAIMA SISTEMAS intenta demostrar al Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que el único fin perseguido por ONENET, S.L. en todo momento ha sido la de desprestigiar a la operadora, comunicando unos supuestos hechos infractores cometidos por SAIMA SISTEMAS de los que jamás ha tenido fundamento y prueba algunos.

**DECIMOCUARTO.** Con fecha 26 de septiembre de 2005, el instructor del presente procedimiento sancionador dio traslado al Secretario de esta Comisión de la propuesta de resolución, junto con el expediente administrativo instruido y el escrito de alegaciones presentado por SAIMA SISTEMAS (Documento 17).

## II

### HECHOS PROBADOS

De la documentación obrante en el expediente y de la prueba practicada esta Comisión considera que han quedado probados, a los efectos del procedimiento de referencia, los siguientes hechos:

**PRIMERO.** Que SAIMA SISTEMAS, S.L. ha iniciado, antes de presentar ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la notificación fehaciente a la que se refiere el artículo 6.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, las actividades consistentes en la explotación de una red pública y en la prestación de un servicio de comunicaciones electrónicas.

Según consta en las actuaciones realizadas y en los documentos incorporados a la instrucción del procedimiento sancionador, este hecho probado resulta de lo siguiente:



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

1. Escrito de alegaciones de SAIMA SISTEMAS de fecha 3 de junio de 2004 con registro de entrada en esta Comisión el 18 de junio del mismo año.

En el escrito de alegaciones de fecha 3 de junio de 2004 (Documento 3), con entrada en el Registro de esta Comisión el día 18 de junio del mismo año, SAIMA SISTEMAS informa expresamente que “(...) *Saima Sistemas ha utilizado clientes de su cartera (la cual se le presta otros servicios no relacionados al acceso a Internet) para realizar pruebas y poner en práctica los conocimientos adquiridos en este último año. Estos servicios han sido de mutuo acuerdo y lo que se pretendía es ver el resultado del día a día. Sin duda el resultado de pruebas ha sido un éxito, lo que nos ha motivado dar el paso a la notificación para poder prestar servicios de Internet (sobre todo en redes Wi-Fi) a clientes potenciales que están a la espera de poder recibir nuestros servicios.*”

2. Escrito de alegaciones de SAIMA SISTEMAS de fecha 17 de febrero de 2005.

Igualmente, en el escrito de alegaciones de SAIMA SISTEMAS de fecha 17 de febrero de 2005 (Documento 8), la citada entidad reconoce expresamente que “*Saima realizó pruebas y testeos con clientes de absoluta confianza con el objeto de ir implementando dicha tecnología [WIFI] y como así se indicó, comprobar dichos testeos in situ*” Asimismo, continúa señalando que “(...) *no facturó por estos servicios a esos clientes y así se puede acreditar (...)*” [página 3 del escrito de alegaciones].

3. Escrito de alegaciones de SAIMA SISTEMAS de fecha 17 de febrero de 2005.

Más adelante, en el citado escrito, SAIMA SISTEMAS señala que “(...) *cuando Saima realizó los diversos testeos con esos clientes de confianza y toda vez que comprobó que esta tecnología podría ser empleada para prestar servicios de comunicaciones electrónicas, sólo en ese momento, fue cuando efectuó la notificación, indicando la fecha de inicio de la actividad para el 1 de mayo de 2004*” [página 4 del escrito de alegaciones].

4. Escrito de SAIMA SISTEMAS de fecha 29 de abril de 2005 remitido en contestación al requerimiento de 14 de abril del mismo año.

En el escrito de contestación al requerimiento de fecha 29 de abril de 2005 SAIMA SISTEMAS, después de facilitar los datos de las entidades con las que realizó las pruebas mencionadas en sus escritos de alegaciones, informa de los periodos en los que se llevaron a cabo las mismas (Documento 10), “*Las*



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

*pruebas de estas dos empresas fueron en semanas diferentes entre finales del mes de Enero de 2004 y principios de febrero de 2004”*

### 5. Conclusiones.

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, se considera plenamente probado que, SAIMA SISTEMAS, efectivamente, realizó pruebas con clientes de su cartera, para la prestación del servicio de transmisión de datos mediante la implementación de una red basada en la tecnología WI-FI, durante los meses de enero y febrero de 2004, todo ello con anterioridad a la notificación fehaciente a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a la que se refiere el artículo 6.2 de la Ley 32/2003, efectuada por SAIMA SISTEMAS en fecha 19 de abril de 2004, que dio lugar a la Resolución de esta Comisión de 4 de mayo de 2004, por la que se inscribió en el Registro especial de Titulares de Autorizaciones Generales a SAIMA SISTEMAS, S.L. como persona autorizada para la explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.

Por ello, se considera probado que SAIMA SISTEMAS ha iniciado, antes de presentar ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la notificación fehaciente a la que se refiere el artículo 6.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, las actividades consistentes en la explotación de una red pública y en la prestación de un servicio de comunicaciones electrónicas.

**SEGUNDO. Que SAIMA SISTEMAS ha obtenido en el ejercicio de 2004 unos ingresos brutos de explotación anuales de 3.996 euros.**

Tal hecho resulta de la declaración de los ingresos brutos obtenidos por SAIMA SISTEMAS en el ejercicio de 2004. La declaración de los ingresos brutos correspondientes a tales actividades fue presentada ante esta Comisión por el representante legal de SAIMA SISTEMAS el día 23 de marzo de 2005 (Documento12).

### III

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO. Habilitación competencial de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para resolver el presente procedimiento sancionador.**

El Pleno del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones es el órgano competente para incoar y resolver el presente procedimiento



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

sancionador, a tenor de lo establecido en el artículo 58 a) 1º de la Ley 32/2003. De acuerdo con este precepto, corresponde a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por medio de su Consejo, el ejercicio de la competencia sancionadora cuando se trate de infracciones muy graves tipificadas en los párrafos q) a x) del artículo 53, infracciones graves tipificadas en el párrafo p) y, en el ámbito material de su actuación, en el párrafo q) del artículo 54.

### **SEGUNDO. Tipificación de los hechos probados.**

El presente procedimiento sancionador se inició ante la posible comisión de una infracción tipificada en el artículo 53 t) de la Ley 32/2003, que califica como infracción muy grave la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas sin cumplir los requisitos exigibles para realizar tales actividades establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo.

Tal y como consta en el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador (Documento 5), el expediente se inició contra SAIMA SISTEMAS por haber incurrido, presuntamente, en la conducta consistente en la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas sin cumplir los requisitos exigibles para realizar tales actividades, establecidos en la Ley 32/2003 y su normativa de desarrollo.

El apartado 2 del artículo 6 de la Ley 32/2003 establece como un requisito exigible para la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas, que los interesados en la explotación de una determinada red o en la prestación de un determinado servicio de comunicaciones electrónicas deberán, con anterioridad al inicio de la actividad, notificarlo fehacientemente a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en los términos que se determinen mediante Real Decreto, sometiéndose a las condiciones previstas para el ejercicio de la actividad que se pretenda realizar.

A estos efectos, debe tenerse en cuenta el alcance legal de los conceptos: “Explotación de una red de comunicaciones electrónicas” y “Servicio de comunicaciones electrónicas”.

La Ley 32/2003 define estos conceptos en su Anexo II, de la siguiente forma:

*“13. Explotación de una red de comunicación electrónica: la creación, el aprovechamiento, el control o la puesta a disposición de dicha red.”*

*“28. Servicio de comunicaciones electrónicas: el prestado por lo general a cambio de una remuneración que consiste, en su totalidad o principalmente,*



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

*en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas ...”*

También ha de tenerse en consideración que, a diferencia de lo que establecía el artículo 7.1 de la anterior Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones (derogada por la vigente Ley 32/2003), **la actual Ley General de Telecomunicaciones no prevé supuestos en los que se puedan otorgar autorizaciones provisionales para la realización de pruebas de carácter experimental y para actividades de investigación.** El régimen legal actualmente en vigor que regula la autorización general está diseñado de tal forma que, cualquier actividad que pueda ser encuadrada dentro de las definiciones anteriormente transcritas, deberá ser objeto previo de la notificación a la que se refiere el artículo 6.2 de la Ley 32/2003. Esto es así por cuanto la autorización general que habilita para realizar estas actividades dimana directamente de la propia Ley, por lo que los interesados que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 6.1 de la Ley para quedar amparados por la citada autorización general, solo han de cumplir, de forma previa al inicio de la actividad, con la obligación de realizar la citada notificación.

A la luz de las anteriores consideraciones, es preciso analizar las circunstancias concurrentes en el caso de SAIMA SISTEMAS, destacando que, conforme a lo establecido en el Anexo II de la Ley 32/2003, la explotación de una red incluye su creación como requisito suficiente, según la definición citada, y que la Ley 32/2003 no contempla la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en pruebas a través de la correspondiente autorización provisional (artículo 7.1 de la derogada Ley 11/1998, de 24 de abril).

Pues bien, en la instrucción del procedimiento ha quedado probado que SAIMA SISTEMAS, efectivamente, realizó pruebas con clientes de su cartera, para la prestación del servicio de transmisión de datos mediante la implementación de una red basada en la tecnología WI-FI, durante los meses de enero y febrero de 2004, todo ello con anterioridad a la notificación fehaciente a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a la que se refiere el artículo 6.2 de la Ley 32/2003. En el presente caso lo determinante en la comisión de la infracción es que la explotación de la red y la prestación del servicio comenzaron con anterioridad a la notificación fehaciente a esta Comisión, cursada el día 19 de abril de 2004, como ha quedado asimismo acreditado.

En consecuencia, SAIMA SISTEMAS explotaba una red y prestaba un servicio de comunicaciones electrónicas sin cumplir los requisitos exigibles para realizar tales actividades, incurriendo en la infracción tipificada en el artículo 53 t) de la citada Ley. Ello, considerando que no hubo notificación fehaciente en los términos previstos en el artículo 6.2 de dicha Ley sino hasta el conocimiento de



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

las actuaciones previas seguidas por esta Comisión en el procedimiento RO 2004/441.

Por todo ello, se concluye que la instrucción del procedimiento sancionador ha revelado que la infracción tipificada en el artículo 53 t) de la Ley 32/2003 se concreta, en el presente caso, en que SAIMA SISTEMAS llevaba a cabo las actividades consistentes en la explotación de una red pública y en la prestación de un servicio de comunicaciones electrónicas antes de presentar ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la notificación fehaciente a la que se refiere su artículo 6.2, existiendo pues tipicidad en la actuación de dicha entidad, conforme lo establecido en el artículo 129 de la LRJPAC.

### **TERCERO. Culpabilidad de SAIMA SISTEMAS en la comisión de la infracción y ausencia de eximentes de responsabilidad.**

#### **A. Culpabilidad de SAIMA SISTEMAS en la comisión de la infracción.**

Una vez acreditada la existencia de una infracción creada y tipificada por la Ley, el ejercicio efectivo de la potestad sancionadora precisa de un sujeto pasivo al que se impute su comisión. La realización de un hecho antijurídico debidamente tipificado ha de ser atribuida a un sujeto culpable.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 1995 (RJ 1995\9329), reconoce la aplicabilidad del principio de culpabilidad al ámbito del procedimiento administrativo sancionador:

*“La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en línea con la del Tribunal Constitucional, ha establecido que la potestad sancionadora de la Administración, en tanto que manifestación del “ius puniendi” del Estado, se rige por los principios del Derecho penal, siendo principio estructural básico el de culpabilidad, incompatible con un régimen de culpabilidad objetiva, sin culpa, encontrándose esta exigencia expresamente determinada en el artículo 130.1 LRJPAC ...”.*

De conformidad con esta doctrina jurisprudencial, el legislador español ha recogido el principio de culpabilidad al regular la potestad sancionadora de la Administración. Así, el art. 130.1 de la LRJPAC establece que:

*“Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia.”*

De este modo, para la imposición de una sanción por la Administración se exige que el infractor sea culpable de los actos sancionados; es decir, que le sea imputable la autoría de la infracción, aún a título de simple inobservancia, tal y como establece el artículo 130.1 de la LRJPAC. En este sentido se



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

expresa el Fundamento de Derecho Quinto de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 28 de noviembre de 1994 (RJCA 1995\678):

*“Asimismo se alega la inexistencia de culpabilidad a título de dolo o culpa. Pero es evidente que el incumplimiento por la Empresa de medidas de obligada observancia constituye al menos una negligencia y, como tal, debe ser calificada de conducta culposa.”*

En todo caso, el elemento subjetivo que la culpabilidad supone se refiere a la acción en que la infracción consiste y no a la vulneración de la norma, tal y como ha declarado reiteradamente la Jurisprudencia. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 1991 (RJ 1991\477), en su Fundamento de Derecho Cuarto, enuncia claramente la conceptualización del principio de culpabilidad:

*“Por último en cuanto a la alegada ausencia de intencionalidad de incumplir las disposiciones legales, referidas en la resolución sancionadora, y a la necesidad del dolo o culpa como elemento de la infracción administrativa, debe señalarse, que, sin negar este elemento, no puede afirmarse que el dolo o la culpa deban entenderse como acto de voluntad directamente referido a la vulneración de la norma que define el tipo de falta, sino que con lo que debe relacionarse dicha voluntad, como elemento del dolo o culpa, es con la conducta y el resultado de ella que dicha norma contempla como supuesto del tipo de falta.*

*No es que se quiera vulnerar la norma, sino que se quiera realizar el acto que la norma prohíbe.”*

Tal y como queda expresado en la Jurisprudencia invocada, un elemento necesario de la infracción administrativa es el dolo o la culpa. En lo que aquí interesa, resulta que la consideración conjunta de lo dispuesto por el artículo 130.1 de la LRJPAC y el artículo 1104 del Código Civil lleva a concluir que, en el cumplimiento de las obligaciones, ha de ponerse aquella diligencia que resulte exigible en función de la propia naturaleza de la obligación y de las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. En consecuencia, cabe atribuir responsabilidad a título de negligencia, entendida como la falta de diligencia debida para evitar un resultado antijurídico, previsible y evitable.

En este sentido, ha de señalarse que, en el ámbito de la responsabilidad administrativa, no basta con que la conducta sea antijurídica y típica, sino que también es necesario que sea culpable, esto es, consecuencia de una acción u omisión imputable a su autor por malicia o imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable (entre otras, así lo exponen la Sentencia de la Sala del Tribunal Supremo del artículo 61 de la LOPJ de 6 de noviembre de 1990 [RJ



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

1992\9158], y la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1994 [RJ 1994\5590]).

Asimismo, en el presente caso, el análisis de la concurrencia de culpa o negligencia debe atender al sector social sobre el que se proyectan las acciones y omisiones que constan probadas, es decir, al mercado de las telecomunicaciones. Así lo tiene establecido un consolidado criterio jurisprudencial plasmado, entre otras muchas, en la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 25 de enero de 1985 (RJ 1985\199):

*“ (...) como ya viene sancionando con reiteración la jurisprudencia de esta Sala en sus sentencias, entre otras, de quince de junio de mil novecientos sesenta y siete (RJ 1967\3487) y cinco de Marzo de mil novecientos ochenta y dos (RJ 1982\1286) y como dice esta última «para calificar como culposa una conducta no sólo ha de atenderse a la diligencia exigible según las circunstancias de personas, tiempo y lugar, sino además al sector del tráfico o de la vida social, en que la conducta se proyecte, y determinar si el agente obró con el cuidado, atención o perseverancia exigibles y con la reflexión necesaria con vistas a evitar el perjuicio de bienes ajenos jurídicamente protegidos, contemplando no sólo el aspecto individual de la conducta humana, sino también su sentido social, determinado por la función de esta conducta, en la vida en común»”.*

Partiendo de todo ello, es preciso concluir en la existencia de una conducta culpable por parte de SAIMA SISTEMAS en los hechos que configuran el tipo infractor del que trae causa el presente procedimiento sancionador.

En efecto, a la luz de los actos de instrucción y de los hechos probados que constan en la presente Resolución, así como de los razonamientos que más adelante se exponen en contestación a las alegaciones del imputado, resulta que la citada entidad ha realizado la conducta objeto de la infracción de forma consciente y voluntaria. Por otra parte, teniendo en cuenta la actitud que ha dado lugar a la comisión de la infracción (haber omitido el deber de realizar la notificación previa a la que se refiere el artículo 6.2 de la Ley 32/2003), ésta debe ser considerada como una actitud negligente o viciada de ignorancia inexcusable, con la consiguiente culpabilidad.

### **B. Inexistencia de causas eximentes de responsabilidad.**

En cuanto a la concurrencia en el presente caso de causas eximentes de la responsabilidad, es preciso traer a colación la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 4 de octubre de 1998 (RJCA 1998\3874), que concluye que, atribuida una conducta infractora a un sujeto, concurre la culpabilidad salvo aparición de circunstancias eximentes:



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

*“... El elemento de la culpabilidad... presupone que la acción u omisión enjuiciada ha de ser imputable a su autor por malicia, o imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 febrero 1990). Ahora bien presupuesto el fundamento de la culpabilidad es la imputabilidad que ha sido definida por Luzón Domingo como la “posibilidad abstracta y potencial de que al hombre le sean atribuibles conductas que puede realizar, como a su causa eficiente, consciente y libre”. Pero este presupuesto de la culpabilidad no se formula de forma positiva sino que ha de deducirse de la no concurrencia de alguna de las causas que lo excluyen.”*

Tales circunstancias eximentes, reguladas en el actual Código Penal (cuyos principios son de aplicación, tal y como ha señalado reiteradamente la Jurisprudencia, al procedimiento administrativo sancionador), no concurren en el supuesto que nos ocupa, pues o bien se refieren a circunstancias subjetivas que sólo pueden concurrir en las personas físicas y no en las jurídicas, o bien se refieren a la intervención de un tercero o a la existencia de un acontecimiento de fuerza mayor, lo que no resulta de los hechos probados.

En consecuencia, no cabe aplicar al presente supuesto ninguna causa eximente de responsabilidad.

### **CUARTO. Circunstancias modificativas de la responsabilidad infractora.**

#### **a) Circunstancias agravantes.**

De acuerdo con los criterios de graduación contenidos tanto en el artículo 56.2 de la Ley 32/2003 como en el artículo 131.3 de la LRJPAC, se considera que no concurre en el presente caso ninguna causa de agravación de la responsabilidad.

#### **b) Circunstancias atenuantes.**

De acuerdo con los criterios de graduación contenidos tanto en el artículo 56.2 de la Ley 32/2003 como en el artículo 131.3 de la LRJPAC, se considera que concurren en el presente caso las siguientes circunstancias atenuantes de la responsabilidad:

- Inexistencia de infracciones cometidas por el sujeto infractor con anterioridad.
- La ausencia de beneficio para el infractor por los hechos objeto de infracción.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

### **QUINTO. Contestación a las alegaciones de SAIMA SISTEMAS incluidas en su escrito de fecha 17 de febrero de 2005. (Documento 8)**

Tal y como consta en los antecedentes de hecho de la presente resolución, mediante escrito de fecha 17 de febrero de 2005, el representante legal de SAIMA SISTEMAS presentó las alegaciones que tuvo por conveniente (Documento 8), procediéndose a continuación a darles cumplida contestación:

- Ausencia de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.

El representante legal de SAIMA SISTEMAS alega que realizó pruebas con clientes de confianza con el objeto de implementar la tecnología RLAN-WIFI, sin embargo, expone que estas pruebas no constituyeron tráfico mercantil en su sentido estricto y tampoco deben considerarse prestación de servicios.

Al respecto cumple señalar, en primer lugar, que el concepto de explotación de una red de comunicaciones electrónicas incluye la creación de dicha red, tal y como se desprende del citado Anexo II de la Ley 32/2003. Por ello, la infracción se habría perfeccionado desde el momento en que SAIMA SISTEMAS había creado una red sin notificación fehaciente previa a esta Comisión, con total independencia de que el propósito de su creación fuera la realización de pruebas sobre la misma. Sin la creación en un primer momento de la red, no podrían realizarse pruebas sobre ella.

En segundo lugar, por lo que se refiere a la prestación del servicio de comunicaciones electrónicas, y con abstracción del hecho de que la red ya estuviese creada -incurriendo por dicha creación y por sí sola, como queda dicho, en el tipo infractor del artículo 53 t) de la Ley 32/2003- resulta que esta Ley no diferencia entre prestación de servicios en pruebas o con carácter experimental de la prestación en general de servicios de comunicaciones electrónicas, tal y como sí hacía la Ley 11/1998, de 24 de abril. En consecuencia, resulta que la prestación en pruebas de un servicio de comunicaciones electrónicas no se distingue, en la Ley 32/2003, de cualquier otra prestación de servicios que requiere la previa notificación fehaciente, razón por la cual no puede prosperar la alegación de SAIMA SISTEMAS en este particular.

- Ausencia de utilización de una red pública de comunicaciones electrónicas.

SAIMA SISTEMAS ha alegado que *“no utilizó una red pública de comunicaciones electrónica porque no prestó servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. Tampoco prestó el servicio de comunicaciones electrónicas porque no obtuvo remuneración alguna ni lo hizo a título gratuito ya que no prestó ningún tipo de servicio.”*



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Asimismo, considera que *“los destinatarios de esos testeos no pueden englobarse en el concepto de “público” que se asimila al concepto de usuario o destinatario de una prestación”*.

La Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, ya incluía en su Anexo I una definición de lo que debía entenderse por red pública de telecomunicaciones. La calificación de una red como pública se realizaba en contraposición con la posible calificación de una red como privada, y lo que determinaba su carácter de pública o de privada era la utilización de la red para la prestación de servicios disponibles al público en general y no a un número reducido de usuarios como ocurría en el caso de esta últimas.

La vigente Ley 32/2003 mantiene la definición de red pública de comunicaciones en el sentido introducido por la Ley 11/1998. En consecuencia, la interpretación realizada por SAIMA SISTEMAS, por la que considera que no utilizó una red pública, se desvirtúa por cuanto la red servía para la prestación del servicio de transmisión de datos.

### **SEXTO. Sanción aplicable a la infracción.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 56.1.b) de la Ley 32/2003, las sanciones que pueden ser impuestas por la mencionada infracción son las siguientes:

Multa por importe no inferior al tanto, ni superior al quíntuplo, del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracción. En caso de que no resulte posible aplicar este criterio, el límite máximo de la sanción será de dos millones de euros.

Las infracciones muy graves, en función de sus circunstancias, podrán dar lugar a la inhabilitación hasta de cinco años del operador para la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.

En aplicación de los anteriores criterios de graduación de las sanciones y de las actuaciones habidas en el presente procedimiento, los límites de la sanción que puede ser impuesta a SAIMA SISTEMAS por la comisión de la infracción objeto del presente procedimiento son los siguientes:

- En cuanto a la cuantía de la sanción máxima, procede señalar que no resulta posible determinar el beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracción por cuanto que la infracción cometida no reporta ningún beneficio para el infractor, al ser la



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

notificación un acto totalmente gratuito para el operador. Por tanto, la sanción máxima que se podría imponer es de dos millones de euros.

- No existe límite, en el presente caso, para el establecimiento de la cuantía de la sanción mínima, habida cuenta de la inexistencia de beneficio para el infractor.

El artículo 131.2 de la LRJPAC dispone que el establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. En consecuencia, ha de tenerse en cuenta esta previsión legal a la hora de establecer la sanción correspondiente.

La sanción que se proponga imponer a SAIMA SISTEMAS debe atender necesariamente al principio de proporcionalidad, que preside la actividad sancionadora de la Administración, y a los criterios de graduación establecidos en el artículo 131.3 de la LRJPAC y 56.2 de la Ley 32/2003.

En este contexto, *“la Administración debe guardar la debida proporcionalidad entre la sanción impuesta, la infracción cometida y las circunstancias de toda índole que en ella concurren”* (Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1998, RJ 1998\2361). Y este principio de proporcionalidad *“se entiende cumplido cuando las facultades de la Administración para determinar la cuantía de la sanción concretada en la multa (...) han sido desarrolladas, en ponderación de los datos obrantes en el expediente, dentro de los límites máximos y mínimos permisibles para la gravedad de la infracción”* (Sentencia de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 1991, RJ 1991\4349).

En atención a ello y en aplicación del principio de proporcionalidad al presente caso y a la vista de que la actividad infractora no ha reportado a SAIMA SISTEMAS beneficio bruto alguno, teniendo en cuenta que concurren dos circunstancias atenuantes, se considera que procede imponerle una sanción económica de MIL (1.000) EUROS.

### **SÉPTIMO. Alegaciones de la entidad SAIMA SISTEMAS a la propuesta de resolución del instructor del expediente sancionador.**

- En relación con las alegaciones presentadas por el representante legal de la entidad SAIMA SISTEMAS a la propuesta de resolución notificada por el instructor del procedimiento en lo que a defectos formales se refiere, es preciso señalar que mediante el escrito de 26 de julio de 2005, notificado con



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

fecha 27 de julio, el representante legal de SAIMA SISTEMAS fue informado de todos aquellos aspectos que tanto el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora como la LRJPAC establecen.

El escrito de 28 de julio de 2005, únicamente vino a subsanar la existencia de un error material en la notificación efectuada el día anterior, en relación con un aspecto muy concreto como fue la transcripción del importe de la sanción económica propuesta, por lo que no cabe apreciar omisión de ninguno de los requisitos aplicables a las notificaciones que la normativa impone.

A mayor abundamiento, el artículo 58.3 de la LRJPAC señala que las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda.

- En segundo lugar, la representación de SAIMA SISTEMAS alega la omisión por el instructor del presente procedimiento de los resultados de sus averiguaciones respecto de las entidades con las que SAIMA SISTEMAS había realizado las pruebas mencionadas en la presente Resolución.

En este sentido, señalar que no se ha producido tal omisión, dado que el instructor no ha realizado ninguna actuación en relación con las entidades mencionadas al considerar que no eran relevantes para determinar la existencia de responsabilidad susceptible de sanción, todo ello de conformidad con el artículo 16.2 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

- Varias de las alegaciones inciden sobre determinados aspectos a considerar en el momento de determinar el importe de la sanción por parte de esta Comisión. Entre ellos se invoca el periodo temporal en el cual se realizó la actividad considerada –la explotación de una red pública y la prestación de un servicio de comunicaciones electrónicas- que según la representación de SAIMA SISTEMAS se redujo a dos días. Asimismo, se refiere a la falta de proporcionalidad del importe de la sanción propuesta por el instructor, considerando el beneficio de 3.996 Euros obtenido en 8 meses y 12 días.

En este sentido señalar que en la fijación del importe de la sanción aplicable se han considerado diversos aspectos según se expone a lo largo de la Resolución, no siendo posible considerar la alegación de falta de proporcionalidad esgrimida. En relación con esta alegación no debe olvidarse que nos encontramos ante una infracción muy grave de las



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

contempladas en la Ley. Se reitera aquí que, conforme lo establecido en el artículo 56 de la Ley 32/2003 para las infracciones muy graves, el límite inferior de la sanción imponible es el tanto del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos en que consista la infracción, resultando que, en el presente caso, se ha estimado que no ha existido beneficio bruto alguno para la entidad infractora, mientras que la sanción máxima que se podría imponer es de dos millones de euros.

- En cuanto a la alegación referida a que ni creó ni explotó una red ni prestó un servicio de comunicaciones electrónicas, a pesar de que SAIMA SISTEMAS ha reconocido la realización de pruebas a lo largo de la tramitación del presente procedimiento, destacar, nuevamente, que la prestación en pruebas de un servicio de comunicaciones electrónicas no se distingue, en la Ley 32/2003, de cualquier otra prestación de servicios que requiere la previa notificación fehaciente, razón por la cual tampoco puede prosperar la alegación presentada.

Por todo ello, se concluye que ninguna de las alegaciones presentadas por SAIMA SISTEMAS a la propuesta de resolución desvirtúa su contenido, razón por la cual procede desestimarlas en su conjunto.

Vistos los antecedentes de hecho, hechos probados y fundamentos de derecho y, vistas, asimismo, la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto y demás normas de aplicación, esta Comisión,

### RESUELVE

**PRIMERO.** Declarar responsable directo a SAIMA SISTEMAS, S.L. de la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 53 t) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, por haber iniciado, antes de presentar ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la notificación fehaciente a la que se refiere el artículo 6.2 de la Ley General de Telecomunicaciones vigente, las actividades consistentes en la explotación de una red pública y en la prestación de un servicio de comunicaciones electrónicas.

**SEGUNDO.** Imponer a la entidad SAIMA SISTEMAS, S.L. una sanción económica por importe de MIL (1.000) EUROS.



## **COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES**

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la Resolución a la que se refiere el presente certificado, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante esta Comisión en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.17 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, la Disposición adicional cuarta, apartado 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 del artículo 58 de la misma Ley.

**EL SECRETARIO**

**Vº Bº EL PRESIDENTE**

Jaime Almenar Belenguer

Reinaldo Rodríguez Illera